

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 30º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-17527-2020
CARATULADO : ZALAUQUETT/FISCO DE CHILE / CDE

Santiago, catorce de Marzo de dos mil veintidós

VISTOS:

Con fecha 26 de noviembre de 2020, comparece don Alberto Espinoza Pino, abogado, domiciliado en Luis Thayer Ojeda N° 1737, oficina 32, comuna de Providencia, Santiago y doña Marta de la Fuente Olguín, abogada, domiciliada Simón Bolívar N° 8800, La Reina, Santiago, Región Metropolitana, en representación de doña **Patricia Angélica Zalaquett Daher**, comerciante, domiciliada en Príncipe de Gales N° 7441, casa B, comuna de La Reina, Santiago, e interponen demanda de Indemnización de perjuicios por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, domiciliado en Agustinas N° 1687, comuna y ciudad de Santiago.

Sostienen que en el marco de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos acontecidas en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 1973, y bajo el pretexto de los gobernantes de facto de combatir una guerra interna, se implementaron políticas genocidas y criminales tendientes al exterminio, a la desaparición y a la tortura de miles de personas a fin de acallar a quienes disientían del régimen imperante.

Señalan que los crímenes de lesa humanidad registrados incluyeron ejecuciones, secuestros, torturas, detenciones en campos de concentración, relegaciones, persecución y exilio. Los hechos consignados en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), y de la Comisión Nacional sobre



Prisión Política y Tortura (Comisión Valech I) evidencian la implementación de esta política por parte del Estado de Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 en todo el país. La tortura era normal en las detenciones e interrogatorios. Éstos, como se ha comprobado, su ejecución correspondía a agentes y personal de los respectivos servicios de inteligencia de cada rama castrense, de Investigaciones, y a Carabineros de Chile. En los centros de interrogatorio se sometía a torturas sistemáticas a los prisioneros con el fin de obtener alguna supuesta información buscada, hacer alguna declaración (con frecuencia auto incriminatoria), y/o aterrorizar al prisionero, así como a los otros quienes eran obligados a presenciar estas sesiones de sadismo, o bien a escuchar los gritos de dolor de sus compañeras y compañeros, imaginando lo peor, y siempre impotentes al no poder hacer nada para evitar que estos tratos vejatorios continuaran.

Indican que durante la dictadura de Pinochet, se creó una institucionalidad al servicio de la política criminal de la dictadura cívico militar, la Dirección de Inteligencia Nacional DINA y la Central Nacional de Informaciones CNI, forman parte de esa institucionalidad, la que tenía los recursos materiales y humanos y una orgánica jerarquizada para la ejecución del plan criminal, que se manifestó en una violación masiva, sistemática y generalizada de los Derechos Humanos, en contra de la población civil.

Alegan que doña Patricia Angelica Zalaquett Daher, es precisamente una víctima de secuestro, tortura y prisión política y su relato es el siguiente: *“Me detuvieron en mi domicilio de calle Pudeto 2755, Villa El Recodo, Concepción, el día 23 de agosto de 1984, aproximadamente a las 16.30 horas, agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI.*

Me tiraron al suelo, me golpearon mientras una cámara de Televisión Nacional filmaba esta “noticia”. Me preguntaban por mi hija Javiera que estaba en el jardín infantil de 3 años 8 meses. Me llevan



vendada a un recinto, me toman datos personales y preguntan por mi marido y me revisa un médico de la CNI.

En la madrugada del 24 de agosto me trasladan en una avioneta a Santiago, además del piloto viajaban tres agentes de la CNI. Supuse que estaba en Santiago, me suben a furgón y me llevan a un recinto que después supe que era el Cuartel Borgoño.

Bajo por unas escaleras de concreto, me hace desnudarme y me ponen un overol azul de mezclilla y zapatillas. Me encierran en una celda de dos metros por uno y medio, al rato me llevan a interrogatorio donde preguntan por mi marido y sus actividades. No satisfechos con mis respuestas me amenazan con golpes, corriente eléctrica y que me tirarían a un río.

Desnuda me hacen ducharme con agua fría, me secaron, con los pies en el agua, me aplican como seis veces corriente eléctrica en las manos, con una llaves que debía apretar, y un agente me apretaba fuertemente el hueso de la nariz. Luego me colocan el overol y de vuelta a la celda.

Después, no recuerdo si ese día o al siguiente nuevamente a sala de interrogatorios, me desnudan y me suben a una camilla, amarran fuerte mis pies y manos, mojaron mis genitales y me pusieron un cable ahí y otro en el lóbulo de mi oreja derecha. En esa posición me hacen unas 15 descargas eléctricas, provocándome un terrible dolor y fuertes saltos.

Mientras me aprietan muy duro el estómago sigo insistiendo en mis respuestas y concluyen la sesión. Luego veo mi buzo y tengo una gran mancha roja entre las piernas.

En el tercer o cuarto día, no recuerdo bien, siguen las sesiones de interrogatorio sobre el paradero de mi marido y sus actividades, me gritan que todo lo que dicho no sirve para nada. En las noches me administraban un medicamento que ignoro que era.

Cuarto día me llevan a una sala acolchada, me hicieron vestirme, en esa sala había una potente luz, y una voz por un



micrófono, me sacan la venda y me están filmando me hacen contar hasta 12 y me preguntan con micrófono mis datos personales.

El 26 de agosto llegan a mi celda dos agentes para que firmara una declaración, estando yo vendada, al principio me negué pero finalmente firmé pues ya no daba más.

El 27 de agosto me sacan de esas dependencias y hago un largo viaje en auto, siempre vendada. Al sentir la luz del sol sentí que aún existía una posibilidad de seguir con vida.

Por el sentido del camino y las curvas me di cuenta que llegábamos a Concepción, ahí me llevan a otro cuartel de la CNI. Luego el 29 de agosto me llevan a la Fiscalía Militar. Al salir de la incomunicación me entero que mi marido Nelson Herrera Riveros había sido asesinado en la Vega Monumental, en el mismo momento que yo era detenida en mi casa.

El día de mi detención, mi hija Javiera Herrera Zalaquett fue sacada del jardín infantil por agentes de la CNI, mi familia hizo diligencias por su paradero y durante varios días la Intendencia de Concepción niega información sobre su destino. Luego sería encontrada en un Hogar de Menores de Carabineros ubicado en el sector de Lagunillas, Coronel”.

Agregan que posteriormente fue ingresada en calidad de procesada al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coronel, recinto en el que permaneció desde el 4 de septiembre de 1984 hasta el 22 de agosto de 1985, por orden de la Segunda Fiscalía Militar de Concepción.

Afirman que doña Patricia Zalaquett Daher estuvo privada de libertad durante once meses y doce días, siendo procesada como autora del delito contemplado en el inciso 1° del artículo 8° de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas de Fuego y Explosivos, el 1° de septiembre de 1984, en causa Rol 746-84 ante la Segunda Fiscalía Militar de Concepción.

Aluden que el 23 de diciembre de 2006 el Primer Juzgado Civil de Concepción, que conoció de la causa Rol 67.013, a la cual se



acumuló la causa Rol N° 746-84, dictó sentencia que la absolvió de todo delito, misma que fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 11 de julio de 2007 y que se encuentra firme y ejecutoriada.

En consecuencia, manifiestan que doña Patricia Zalaquett fue secuestrada por agentes del Estado en Concepción, trasladada en una avioneta a Santiago, torturada brutalmente en el Cuartel Borgoño y en esos mismos momentos su hija de tres años es secuestrada, apareciendo días después en un Hogar de Menores de Carabineros y su pareja asesinada por la CNI.

Fue privada de libertad por casi un año en proceso del que fue absuelta definitivamente en el año 2006, es decir, mantuvo su calidad de procesada durante veintidós años.

Denotan que por los vejámenes de los que fue víctima, presentó una denuncia en el mismo proceso por detención arbitraria y apremios ilegítimos, pero el Fiscal Militar, sobreseyó parcial y temporalmente a los funcionarios de la C.N.I. de los delitos referidos.

Arguyen que como consecuencia directa del secuestro y la tortura de que fue víctima su representada, se desprende un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile.

Agregan que este daño emocional, moral y material que se causó a Patricia Zalaquett, requiere ser reparado.

Apuntan que en el marco del Derecho, de la Constitución y de la ley, solicitan que se abra el camino para que, en definitiva, se repare, aunque sea parcial y tardíamente, el enorme perjuicio moral causado a esta mujer y madre cuyo única imputación fue la de haber mantenido una relación afectiva con el padre de su hija, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario y asesinado por la CNI.

Explican que se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas.



Aducen que los hechos descritos, configuran graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, entre otros de tortura y persecución. En este caso, se han vulnerado todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagren el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente, los artículos 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículos 1.1, 5, 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y las normas de ius cogens relativas a crímenes internacionales.

Sostienen que, por lo anterior, el deber de reparación debe abordarse desde una perspectiva doble por el carácter de estos hechos ilícitos que causan daño como crímenes de trascendencia internacional.

Refieren que la más precisa configuración de la responsabilidad internacional en el Derecho Internacional Público ha sido formulada por la Comisión de Derecho Internacional uno de los principales órganos jurídicos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal expreso consiste en “impulsar el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación”. Esta Comisión estableció en el artículo 1° del Proyecto de artículos sobre Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, que “todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de este”, determinando como únicos requisitos: la contravención de la norma y la atribución de esta al Estado.



Así el artículo 2 relativo a los “Elementos del hecho internacionalmente ilícito” señala:

“Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión:

- a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y
- b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado”.

La actuación ilícita de un Estado, tiene entonces un efecto fundamental, el cual es el nacimiento del deber de reparación.

Denotan que el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece el derecho a la reparación:

“Artículo 14. Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para la rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de torturas las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales”.

El artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al establecer su competencia señala que comprende los crímenes de lesa humanidad: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: literal f) Tortura; literal h) Persecución”.

De otra parte, indican que la responsabilidad del Estado encuentra su fundamento en las normas de Derecho Público, y en primer término en la Constitución Política de la República. Así, el artículo 38 inciso 2° de la Constitución dispone que toda persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado pueden recurrir ante los Tribunales de Justicia a objeto que el daño



causado sea resarcido. Este precepto consagra una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad del Estado. En otros términos, esta disposición constitucional establece un mecanismo de reparación de los daños producidos por la Administración a los particulares, sistema que se caracteriza fundamentalmente por ser de carácter directo, es decir, la acción de reparación del particular afectado se hace efectiva en el patrimonio fiscal cuando los organismos que causaron el daño, como en el caso de autos, actúan bajo la personalidad jurídica del Estado.

Mencionan que el fundamento básico de esta responsabilidad extracontractual del Estado, está en diversas disposiciones constitucionales y legales. Así, el inciso 4° del artículo 1 de la Carta Fundamental, señala el principio dogmático de servicialidad, según el cual “El Estado está al servicio de la persona humana”. Este principio reconoce explícitamente el carácter preferente de la persona en la Constitución, por ello, cualquier actuación que realicen los órganos del Estado deben ir en beneficio o estar enfocado en la persona.

Expresan que el Estado no es una entidad neutral desde el punto de vista de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, sino que es su deber asegurar y garantizar el ejercicio de estos derechos. Por ello, el Estado no sólo debe reconocer los derechos fundamentales sino que también debe promoverlos; se le impone una actitud positiva frente a la vulneración de las garantías constitucionales, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida y la integridad física y psíquica establecida en el primer numeral del artículo 19 de la Constitución.

A mayor abundamiento, recuerdan que el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución, obliga a todos los órganos del Estado a la promoción de los Derechos Fundamentales. Así, de acuerdo al artículo 5 inciso 2° de la Constitución, el Estado debe respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Por ello, el Estado no sólo debe reconocer los derechos fundamentales sino que también debe promoverlos; se le impone una actitud positiva frente a



la vulneración de las garantías constitucionales, entre los cuales está el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Esta garantía, establecida en el primer numeral del artículo 19 de la Constitución.

Aluden que los artículos 6 y 7 consagran este principio del constitucionalismo clásico, según el cual todos son iguales ante la ley: gobernantes y gobernados.

Indican que la naturaleza de esta responsabilidad extracontractual es de derecho público, y en este sentido, la Excm. Corte Suprema ha sentenciado: “Que, tal como lo ha decidido anteriormente esta Corte, la responsabilidad del Estado por los daños que causan los órganos de su administración enunciada en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de esa Administración, es de Derecho Público y de carácter genérico, por emanar de la naturaleza misma de su actividad en el ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo para los fines que le cometen la Constitución Política y las leyes, para lo cual debe hacer uso de las potestades, medios y acciones materiales conducentes a ellos”. Por lo tanto, se excluye la aplicación de normas civiles a los casos en que se hace efectiva la responsabilidad del Estado.

De esta manera, sostienen que la responsabilidad del Estado no solo es solidaria por los hechos de sus agentes, sino que, además, está regida por el derecho público y no por el derecho privado.

Refieren que el Estado de Chile, , ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación donde queda constancia de la sistematicidad de las graves violaciones a los derechos humanos. También el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura reconoce a la demandante como víctima de la práctica institucional de la tortura lo cual debe servir como demostración del reconocimiento del Estado de su responsabilidad.

Apuntan que las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.



Así lo ha declarado también la Excma. Corte Suprema en numerosos fallos, entre ellos en la causa Rol N° 34.111-19, de 16 de junio de 2020, que acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que revocó el fallo de primer grado, establece que “la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material. Y a lo anterior obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues, de hacerlo, comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado”.

Por otra parte, arguyen que el artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional señala que “Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán”. En esta norma no distingue entre acción penal y acción civil (aquella referida a obtener la indemnización de perjuicios derivado de delitos). Reafirmando lo anterior, el artículo 75 del mismo Estatuto (que trata de la reparación a las víctimas), señala que “La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes.

Añaden que la Convención de Viena sobre los Tratados, Sección Primera bajo el título de Observancia de los tratados, establece en el artículo 26 el principio: “Pacta sunt servanda”. Señalando: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, y en el artículo 27, en relación al derecho interno y la observancia de los tratados, establece: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del



incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

Asimismo, apuntan que esta Convención consagra el principio de *ius cogens* en el artículo 53 en los siguientes términos: “Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”

Concluyen que en el caso de su representada concurren todos los elementos para reparar e indemnizar en concordancia con la magnitud y el tipo de delito de que fue víctima:

a) Existencia de una acción u omisión de un órgano del Estado. En este caso, específicamente por agentes del Estado, en el contexto de un genocidio, mediante la perpetración de crímenes lesa humanidad contra opositores, represión política, persecución, violencia, tortura y muerte. No hubo procedimientos racionales, justicia, legalidad ni misericordia. El hecho criminal cometido contra quien representamos es imputable al Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal.

b) Existencia de un daño. Por el sólo hecho de haberse producido un crimen internacional que afecta gravemente los derechos humanos el daño se presume, especialmente el daño moral y corporal. Sin perjuicio de lo anterior, y como el resultado es evidente, este daño se probará también en la etapa procesal pertinente.

c) Nexos causal. El daño a la víctima emana, justamente, de la perpetración del delito. A consecuencia de un sistema que buscaba vulnerar derechos fundamentales se causaron los más crueles sufrimientos.

d) No existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.



Corresponde entonces que el Estado que ha incumplido los deberes jurídicos más esenciales, que por ser mandatos de justicia se corresponden con la tradición del ius cogens, y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deba al menos reparar. El Estado de Chile, debe así intentar o compensar de forma imperfecta, pues el daño causado a doña Patricia Zalaquett es irreparable.

Denota que es de justicia que esta víctima sea objeto de una indemnización por parte de quien fue responsable de la situación que debió sufrir: secuestrada y torturada en 1984, en momentos en que su cónyuge fue asesinado y su hija secuestrada; permaneció privada de libertad por casi un año y mantuvo su condición de procesada durante más de 22 años en un juicio que culminó en su total absolución de todo cargo en primera y en segunda instancia.

Previas referencias legales y jurisprudenciales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al demandado al pago de la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el Juzgado estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos, con costas.

Con fecha 8 de enero de 2021, se notificó la demanda al Fisco de Chile.

Que con fecha 26 de enero de 2021, la parte demandada contesta la demanda, solicitando su rechazo o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

I.- Excepción de Reparación Integral

Como primera defensa, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la actora.



Afirma que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada.

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Sostiene que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra Ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

Sostiene respecto a las reparaciones mediante transferencias de dinero, que términos de costos generales para el Estado, este tipo de



indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre del año 2019, la suma total de \$ 992.084.910.400.- Asimismo indica, desde esta perspectiva, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que pueda valorizarse para saber cuál fue su impacto compensatorio. De este modo, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como también las mensualidades que todavía quedan por pagar.

Señala que como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere que la actora ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.234 y 19.992 y sus respectivas modificaciones. De este modo, se estableció una pensión anual de reparación y otorgó beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas, estableciendo una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, la actora recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación, en conformidad a la Ley N° 20.874 por la suma de \$1.000.000.-

Expone que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o



consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Hace presente que, además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. Asimismo, se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Afirma que se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores; y también beneficios en vivienda, correspondiente al acceso de subsidios de vivienda.

Manifiesta que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH., se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Asegura que en el caso de una persona como la de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como las siguientes:

- a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;



- b) El establecimiento mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido;
- c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos;
- d) El establecimiento, mediante Ley N°20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos;
- e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los DDHH.

Afirma que puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos, han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos.

Manifiesta que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

Indica que diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

Expresa que, una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar



litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

II.- Excepción de prescripción:

Asimismo el demandado opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, solicitando que por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Manifiesta que, conforme al relato efectuado por la actora, fue detenida entre el 23 de agosto de 1984 y el 22 de agosto de 1985.

Sostiene que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 8 de enero de 2021, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.



Por lo anterior, el demandado opone la excepción de prescripción de cuatro años establecida en el artículo 2332 del Código Civil y en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, habría transcurrido el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Advierte que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso, agrega el demandado, que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”*.

Agrega que la prescripción es una institución universal y de orden público, estando consagrada en las normas del Título XLII del Código Civil, y en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Indica que debe considerarse que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino



aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. Para ello, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercido oportuno de las acciones.

En relación con las alegaciones expuestas por la actora en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, afirma:

1.- Respecto a la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

2.- Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

3.- La Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la



extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, la cual se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no se podría extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Afirma que la recomendación de la comunidad internacional es clara en distinguir entre acciones penales y las acciones civiles que nacen de los mismos hechos; así como en disponer que, mientras las primeras jamás deben prescribir, las segundas, en cambio, si pueden hacerlo, a menos que exista un tratado que así lo contemple expresamente, lo que no acontece.

4.- La Convención Americana de Derechos Humanos, que sin perjuicio de que a la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5 de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, agrega que el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no



impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.

Afirma el demandado que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no se puede apartar del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

III.- En cuanto al daño e indemnización reclamada:

En subsidio de sus defensas y excepciones precedentes, opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$200.000.000.

Con relación al daño moral, la parte demandada hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Señala que tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extra patrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece, a pesar de la indemnización.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la



pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización, asumiendo la premisa indiscutida de que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez solo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Manifiesta que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta absolutamente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Continúa su defensa, señalando que en subsidio de las alegaciones opuestas, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado por otros familiares, como las reparaciones satisfactivas, y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Manifiesta respecto a los reajustes e intereses demandados, que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia



que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Así, a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existiría ninguna suma que deba reajustarse.

Sostiene que los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada, ya que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, resultaría absurdo pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

Por consiguiente, afirma que en el hipotético caso de que se acogiera la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Menciona que la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores ha decidido a este respecto que “En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda al cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio”.



Reitera que en el hipotético caso de que se acoja la acción de autos y se condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Concluye solicitando tener por contestada la demanda civil deducida en autos, y, en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes.

Con fecha 9 de febrero de 2021, la parte demandante evacua el trámite de la réplica, ratificando los fundamentos señalados en la demanda.

Agrega que los beneficios y pagos a que hace referencia el demandando constituyen beneficios sociales y asistenciales que no excluyen que la víctima de crímenes cometidos por agentes del Estado pueda demandar por daños en sede jurisdiccional. Advierte que es la propia Ley N° 19.123 la que en su artículo 2° establece que “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”. Es decir, el daño moral no está reparado por la sola dictación de esa ley, el legislador le impone al Estado la “promoción de la reparación”. Luego en su artículo 24 es explícita en establecer que la pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario” (V.gr. Corte Suprema, sentencia de 6 de agosto de 2018, Rol N° 41.544-17).

Menciona que, en consecuencia, obedece a dos formas distintas de reparación y que las asuma el Estado voluntariamente -en aquel caso- no importa de modo alguno la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia.

Destaca que la reparación íntegra de los daños sufridos por violaciones a los derechos humanos es un principio del derecho internacional público, reconocido en el sistema interamericano de derechos humanos.



De otra parte, hace presente que, la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte ha variado su criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización (Rol N° 19301-18, de 20 de septiembre de 2018, N° 20.288-14, de 13 de abril de 2105; N° 1.424, de 1 de abril de 2014; N° 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras).

Pone de relieve que la historia de la vida de doña Patricia Zalaquett, quedó marcada por la tortura, el secuestro de su hija, el crimen de su marido, la persecución y la prisión política, de manera que el sufrimiento soportado por la demandante es inconmensurable, cuyas huellas físicas y morales persisten hasta el día de hoy, vivió una experiencia traumáticamente violenta, que tiene su origen en la actuación de agentes del Estado, en el marco de una política criminal que puso al Estado al servicio del crimen.

Refiere que los antecedentes acreditan la existencia de un daño extrapatrimonial que debe ser resarcido en toda su extensión, es decir, proporcional al perjuicio y derivarse necesariamente del hecho que lo genera.

Con fecha 22 de febrero de 2021, la parte demandada evacua el trámite de la dúplica, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en el escrito de contestación, teniéndolas por expresamente reproducidas y conforme a ello, solicita el rechazo de la demanda.

Agrega a ello que la normativa invocada al oponer la excepción de pago fue dictada con la finalidad expresa de atender en su integridad la reparación de las víctimas y de los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad, acogiendo las directrices del derecho humanitario que impone a los Estados establecer programas de reparación del daño causado. Menciona que la comunidad internacional demanda de los Estados investigar dichos ilícitos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas o a sus



familiares. Nuestro país ha cumplido con cada uno de dichos aspectos, lo que ha tenido reconocimiento internacional, e incluso de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se expuso al contestar el libelo.

Destaca que la presente acción jurisdiccional se encuentra inserta en lo que se denomina la justicia transicional, cuya regulación permite demostrar que la actora ha optado por los beneficios reparatorios de la Ley 19.992 y sus modificaciones. Y ese texto legal ha sido claro en comprender el daño moral en forma expresa, y en establecer la incompatibilidad de sus beneficios con las pretensiones de una acción judicial centrada únicamente en lo económico, como lo dispone su artículo 24°.

En cuanto a la excepción de prescripción, destaca la importancia la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” concluyendo que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de cuatro años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Además, hace presente que la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil.

Con fecha 18 de marzo de 2021, se recibió la causa a prueba.

Que con fecha 6 de diciembre de 2021, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Alberto Espinoza Pino, y doña Marta de la Fuente Olguín, en representación de doña Patricia Angélica Zalaquett Daher, interponen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Fisco de Chile,



representado por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, todos ya individualizados, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho latamente consignados en lo expositivo de la presente sentencia.

SEGUNDO: Que la demandada contestó el libelo al tenor de lo narrado en lo expositivo de este fallo.

TERCERO: Que con fecha 18 de marzo de 2021, se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos respecto de los cuales debía recaer la prueba, los siguientes:

1°.- Efectividad que la demandante ha sufrido los perjuicios descritos en el libelo pretensor. En la afirmativa, naturaleza y monto de los perjuicios.

2°.- En su caso, efectividad de que dichos perjuicios son imputables al actuar de la demandada.

3°.- Relación de causalidad entre el actuar de la demandada y los perjuicios demandados.

4°.- Efectividad que la demandante fue reparado por el daño extrapatrimonial alegado. En la afirmativa, tipo de reparación obtenida y efectividad de ser satisfactiva.

CUARTO: Que a fin de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó a los autos los siguientes documentos:

1. Copia simple de página 772 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1.040 de 2003.
2. Informe emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la demandante, en calidad de víctima de Prisión Política y Tortura.
3. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, tomo II, página 998.
4. Recorte del Diario Las Ultimas Noticias del día 30 de agosto de 1984.



5. Recorte del Diario El Sur, de 30 de agosto de 1984.
6. Recorte del Diario El Sur, de 27 de agosto de 1984.
7. Sentencia de la Corte Suprema, causa Rol N° 6790-2008, de fecha 17 de diciembre de 2008.
8. Certificado médico de la demandante, de fecha 18 de agosto de 2020, emitido por el Centro del Cáncer.
9. Estudio descriptivo de mortalidad en sobrevivientes de tortura y prisión política en el período de la dictadura militar en Chile, 1973-1990, Revista médica de Chile, versión impresa ISSN 0034-9887. Rev. Médica Chile vol.148 no.12 Santiago dic. 2020.
10. Certificado del Directorio de la Corporación Memoria Cuartel Borgoño 1470, emitido con fecha 16 de junio de 2021 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
11. Publicación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de mayo de 2018, relativa a los crímenes a raíz de la operación montada por la CNI denominada Alfa Carbón.
12. Informe de la Vicaría de la Solidaridad que da cuenta de la muertes y secuestros ocurridos en Concepción en 1984, páginas 95 y 96.
13. Extracto del Libro Fuego de Puro Amor (ISBN10 978-956-9496-25-7, Año 2021), con prólogo de la demandante, doña Patricia Zalaquett.
14. Publicación del diario electrónico El Mostrador, de fecha 4 de mayo de 2018, en relación a la sentencia dictada por el ministro en visita de las Cortes de Apelaciones de Concepción y Chillán, Sr. Carlos Aldana, que condenó a 17 agentes de la CNI por el operativo denominado Alfa Carbón.



15. Informe emitido con fecha 10 de noviembre de 2021, por el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), concerniente a las secuelas en el plano de la salud mental de las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos durante la Dictadura Militar.

QUINTO: Que asimismo, la parte demandante rindió prueba testifical, consistente en las declaraciones de doña Marta Eliana Cisternas Flores, Águeda Rosestela Sáez Fick, y Bernardita Valenzuela Ponce de León.

SEXTO: Que a su turno, la demandada acompañó oficio extendido por el Instituto de Previsión Social (IPS), dando cuenta de todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido doña Patricia Zalaquett.

SÉPTIMO: Que son hechos indiscutidos en la presente causa, por no haber mediado controversia entre las partes, los siguientes:

1.- Que doña Patricia Zalaquett Daher fue detenida ilegalmente por parte de agentes del Estado el día 23 de agosto de 1984, en la ciudad de Concepción.

2.- Que la actora estuvo privada de libertad en forma ilegítima, tanto en Concepción como en Santiago hasta el 22 de agosto del año 1985, y durante dicho período fue objeto de torturas y apremios.

3.- Que la actora ha sido reconocida como víctima de violación a los Derechos Humanos por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el número de registro 26.846.

OCTAVO: Que la presente acción corresponde a una demanda de indemnización de perjuicios, deducida por doña Patricia Zalaquett Daher en contra del Fisco de Chile, por el daño moral sufrido en su calidad de víctima de prisión política y tortura durante el régimen militar.

Luego, sin perjuicio de analizar si concurren los requisitos para acoger la pretensión de la actora, concierne referirse previamente a las defensas esgrimidas por el demandado, las que se circunscriben a



la reparación integral por haber sido ya indemnizada, y a la prescripción.

NOVENO: Que, en efecto, alega la demandada que la actora ya se encontraría indemnizada de los perjuicios padecidos, por haber recibido su reparación integral mediante transferencias de dinero, beneficios de salud (PRAIS) y gestos simbólicos, de manera que al haberse compensado los daños morales sufridos, no pueden ser exigidos nuevamente.

DÉCIMO: Que conforme a lo informado por el Instituto de Previsión Social, consta que la demandante ha recibido como reparación la cantidad total de \$112.187.690.-, siendo su actual pensión por beneficio Ley Rettig de \$588.794.- , y beneficio Ley Valech, de \$194.727.-

UNDÉCIMO: Que las transferencias de dinero realizadas a la actora, los beneficios de salud y las reparaciones simbólicas a que alude la demandada, no implican –necesariamente- la reparación íntegra de los daños padecidos por la demandante en su calidad de víctima de prisión política y tortura, y que el Estado de Chile se encuentra obligado a proporcionar.

En efecto, el propio artículo 24 de la Ley N° 19.123 prescribe en su inciso primero que: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*, reconociendo que éste puede obtener otras reparaciones, como sería aquella decretada, de ser procedente, por los tribunales de justicia vía acción indemnizatoria.

Que lo anterior, se fundamenta considerando que las reparaciones otorgadas por la legislación, han sido concedidas y determinadas por el propio Estado, en términos generales y únicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, de manera que su efecto reparador no necesariamente es pleno.

Que, además, los beneficios otorgados por la Ley N°19.123, dicen relación más bien con prestaciones de carácter asistencial y patrimonial, lo que marca una diferencia ostensible con la reparación



del daño moral. Así, las pensiones mensuales de reparación, la bonificación compensatoria, los beneficios médicos y educacionales, guardan una mayor armonía con los conceptos de daño emergente y lucro cesante, de manera que de estimarse y probarse que el daño moral inferido excede las mencionadas pensiones o es independiente a ellas, no existe razón suficiente como para, de antemano, rechazar la demanda.

Que en el mismo sentido se viene pronunciando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia: *“La normativa invocada por el Fisco – que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido producto de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley”* (Sentencia Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 12.636-2018).

Que conforme a lo que se ha venido exponiendo, cabe desestimar la excepción de reparación integral opuesta por el demandado, sin perjuicio de tener presente el hecho al momento de fijar el monto de la eventual indemnización.

DUODÉCIMO: Que respecto a la excepción de prescripción extintiva, el Fisco de Chile indica que entre la fecha en que se hizo exigible la indemnización y la fecha de notificación de la acción, ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, por tratarse de una materia de responsabilidad extracontractual; y en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 relación al artículo 2514, ambos del Código Civil.



DÉCIMO TERCERO: Que la excepción de prescripción opuesta lleva a cuestionarse si la acción civil que deriva de un delito de lesa humanidad, se aviene a las normas internas que rigen en el ámbito patrimonial donde está consagrada esta institución, o bien, por el contrario, y por la trascendencia de la materia en discusión, escapa de la reglamentación interna, sometiéndose a una normativa supralegal e internacional, relativa a los Derechos Humanos.

Que tal cuestionamiento –y la postura que se adopte- no resulta trivial. En efecto, de estimarse que la prescripción opera íntegramente en estos casos, la acción civil derivada de dichos ilícitos podría prescribir al transcurrir cinco años de cometidos los hechos, o desde la fecha en que existiera certeza que la actora pudo ejercer la acción. A la inversa, de considerarse que la reglamentación patrimonial es inaplicable, la acción civil sería imprescriptible.

DÉCIMO CUARTO: Que para zanjar tal problemática, es necesario considerar que si bien no existe norma -ni nacional ni internacional- que se pronuncie derechamente sobre el particular, este silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad).

Que esta postura, determinante en el ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las conductas que se persigue sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los agentes del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de las personas.

Que, ahora, si bien no existe dicho dictamen en el área civil, el mismo fundamento puede extrapolarse a este ámbito. Más aún, los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos integrados a nuestra normativa conforme al inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental- y la propia legislación interna dictada a consecuencia de dichos crímenes, propenden a una reparación



integral tanto de sus víctimas como de sus familiares, lo que necesariamente incluye el resarcimiento monetario, el que por derivar de un delito de lesa humanidad, trasciende su naturaleza meramente patrimonial, marcando un contraste con el ilícito civil común.

Que así las cosas, la reparación integral que se persigue para aquellos que han sido víctimas de los actos ejecutados por el Estado de Chile en tiempos del régimen militar, debe incluir tanto una persecución penal y un resarcimiento civil que no esté condicionado por el transcurso del tiempo. Solo así, una vez indemnizadas todas aquellas personas que fueron afectadas en dicho período por actos de agentes del Estado, se cumplirá con aquella reparación completa a que Chile se ha comprometido tanto internacionalmente como ante el propio país.

DÉCIMO QUINTO: Que en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al consignar: *“en el caso de delitos de lesa humanidad, como el que sustenta la demanda de los actores, siendo la acción penal persecutoria imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación integral de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, ...”* (Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N°12.636-2018).

Que, con todo lo dicho, dada la naturaleza y contexto de los ilícitos fundantes, esta sentenciadora se inclina por la postura de una imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil, lo que conducirá al rechazo de la excepción de prescripción opuesta.

DÉCIMO SEXTO: Que, ahora, entrando en el fondo de la discusión de estos autos, cabe reiterar que la actora demanda



indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, con ocasión de la prisión política y torturas de que fue objeto desde el 23 de agosto de 1984 y hasta el 22 de agosto de 1985, por parte de agentes del Estado, hecho indiscutido y no desconocido por la demandada, siendo incluso calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados.

Que, por consiguiente, siendo inconcuso el hecho dañoso del que deriva la responsabilidad del Estado hecha valer, cabe centrarse en la demostración del detrimento moral alegado por la actora.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el daño moral es, en términos generales, el menoscabo o agravio a un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a dolo o culpa de otro, que estaba obligado a respetarlo, en la especie, el Estado de Chile.

El daño moral tiene su causa en la transgresión al ordenamiento jurídico y su consecuencia es el sufrimiento causado en la víctima, producto de la limitación a un interés legítimo. Así, la persona titular de un derecho subjetivo o de un bien jurídico, al ser despojada de su legítimo goce, se le priva de su ejercicio y sufre como consecuencia un daño extrapatrimonial.

DÉCIMO OCTAVO: Que el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

DÉCIMO NOVENO: Que si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por la actora -sino únicamente la suma pedida a su respecto-, en aras de evidenciar la conculcación de derechos humanos, la parte demandante rindió prueba testimonial, a cuyo propósito declararon en autos doña Marta Cisternas Flores, doña Águeda Sáez Fick, y doña Bernardita Valenzuela Ponce de León.

La primera testigo, sostiene que los perjuicios sufridos por doña Patricia son reales, los conoció en el año 1984, además fue noticia en Concepción, donde la demandante es detenida y luego trasladada a



Santiago y luego nuevamente enviada a Concepción, donde llega a la cárcel de Coronel en el espacio destinado a las mujeres, lugar en que la conoce. Señala que su esposo fue asesinado y que se le secuestró a su hija.

Agrega que como parte de CODEPU en Concepción, fue a visitar a Patricia para llevarle la chaqueta de su esposo asesinado y que su madre había tenido que lavar, que él usaba cuando fue asesinado. Refiere que sabía lo que había sucedido porque fue noticia en todo Concepción y había visto a Patricia. Explica que en cárcel Patricia la ve entrando con la chaqueta de su cónyuge y lo primero que observa es que se iba a desmayar, y sus compañeras tuvieron que afirmarla. Después se abrazan, pero no le hicieron preguntas sobre lo que estaba pasando, ya que entendía que era muy brutal todo lo ocurrido. Señala que vio tristeza y dolor, ya que estaba al tanto que venía saliendo de la tortura por todo ese periodo de detención y secuestro y ello era muy evidente en esta visita. Agrega que se volvió a reunir con ella en dos oportunidades para hacerle el relato de la obtención de la chaqueta de su cónyuge, de Nelson, acerca del cementerio, del entierro, y ahí estuvo muy consciente del dolor y tristeza que le generó todo lo que pasó. Indica que trabajó durante bastante tiempo con el sacerdote Enrique Moreno Laval y él hizo el relato de como encontraron a la hija de Patty, que fue secuestrada y llevada hasta un recinto de las monjas, lugar al que acudió el sacerdote a buscarla para llevarla con su familia.

Doña Águeda Sáez Fick, por su parte, expone que conoció a Patricia Zalaquett, compartió con ella acciones culturales, militancia política en un tiempo. Supo de su situación cuando su caso salió por la prensa, que su pareja fue asesinada, su hija secuestrada, y además que ella fue detenida. Dice que apenas pudo se dirigió a la cárcel de Coronel a visitarla. Le impresionó verla, se encontró con una persona impactada por todo lo que había vivido, lo que le había pasado y porque había ocurrido hace muy poco el asesinato de su pareja; estaba silenciosa, tratando de entender, de procesar todo lo terrible



que había debido vivir. Refiere que ella estaba afectada físicamente, tiritaba, sin que pudiese controlarse, con una tristeza profunda y preocupada por su hija. Le relató que cuando estuvo presa fue terrible saber que su hija, Javierita, estuvo en los procesos de interrogación. Como no se la mostraban, pensó que era un elemento de presión para su pareja, sometiéndola, y eso fue una pesadilla permanente dentro del proceso de interrogatorio que tuvo.

Agrega que no pudo visitarla de nuevo en la cárcel, y la vio tras su libertad en Santiago, y ya estaba alterado su sistema inmunológico, le dolía la cabeza, estaba con distintas muestras de lo que había vivido, estaba somatizando su experiencia, y si bien era reservada se podía ver que estaba procesando internamente lo que había pasado, tratando de recuperar su relación con su hija en el sentido que se sentía responsable de lo que pudiera pasarle, y en su caso con su única hija, con mayor razón, lo que también le afectaba, y así trataba de no sobreprotegerla y generar una relación sana y normal, pero Javierita vivió el secuestro y detención dentro de un hogar de menores, a pesar que fue rescatada.

Agrega que Patricia ha tenido cánceres distintos y ha podido sobrellevarlos, pero le sorprende el nivel psicosomático y que sus tensiones se han traducido en cáncer de mamas, a la tiroides, al riñón, etc.

El caso de Patty fue público, y los vecinos vieron a las personas que entraron a su casa, y son personajes reconocidos de la CNI y de la prensa, del operativo que se conoció como Operación Alfa Carbón. Allanaron su casa cuando estaba sola y además secuestraron a su hija. Agrega que sus formas de interrogación fueron duras, severas, existían niveles de torturas y a Patricia le tocó vivir el peor nivel, físico y psicológico.

Por último, la testigo Bernardita Valenzuela Ponce de León, refiere que Patricia no se enfrentó a la CNI, no tenía armas, allanaron toda su casa, y ella nunca pudo defenderse, y eso es algo que uno no borra.



Explica que ha estado periódicamente en contacto con la demandante y ha notado en el tiempo como esos perjuicios han afectado su vida. La primera vez después de lo ocurrido fue en el año 1992 cuando fue a su tienda a visitarla, dado que vivía fuera del país, y al verla se encontró con una persona quebrada y que no tenía que ver con quien conocía, hablaba de manera obsesiva de lo ocurrido con su hija, dado que le habían ocultado su paradero, lo que la marcó, transformándose así en una persona muy aprehensiva con su hija, con un dolor por el asesinato de su pareja y afectada por las torturas sufridas, de las que no podía hablar ya que se quebraba. Ella se ponía a llorar.

Ve que todo esto hacía que tuviera una sensación de bloqueo e injusticia por algo que no había provocado. Agrega que Patricia padeció cuatro cánceres y ella sabe que ello es producto del dolor que le provocó la tortura. Aparentemente se ha integrado a la vida normal, tiene una vida normal, pero cuando entra a hablar de estos temas se da cuenta que ella es una persona quebrada, afectada y cuyos dolores no pasan. Eso la ha marcado hasta el día de hoy, existe el temor que aparezca otro cáncer porque el dolor sufrido no ha pasado, además recientemente su hija tuvo cáncer de mamas y cree que ello la hizo revivir todos sus miedos.

Da fe del cambio en la persona de la demandante desde antes de lo que sucediera, que se envejeció, que ya no tiene esa alegría de vivir, y ello coincide con las fechas en que sucedió esta operación Alfa Carbón de la CNI montada, donde salió libre del juicio.

VIGÉSIMO: Que los testimonios circunstanciadamente vertidos, permiten concluir que, producto de la prisión política y torturas de que fue objeto la actora desde agosto del año 1984 y por un período que se extendió casi por un año; unido a la ejecución de su marido, Sr. Nelson Herrera Riveros, y el secuestro temporal de su hija Javiera, de escasos tres años a la época de los hechos, durante dos días, su vida experimentó un cambio profundo, que se tradujo en un daño psíquico de importancia, que se ha extendido en el tiempo.



VIGÉSIMO PRIMERO: Que correspondiendo avaluar prudencialmente el daño moral padecido por la actora, este será estimado en la suma de \$60.000.000.- (sesenta millones de pesos).

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la suma mencionada será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de dictación del fallo, mientras que los intereses corrientes se devengarán desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

VIGÉSIMO TERCERO: Que atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estimando que la demandada ha tenido motivo plausible para litigar, se le eximirá del pago de las costas.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 47, 222, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción.

II.- Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a doña Patricia Angélica Zalaquett Daher la suma de \$60.000.000.- (sesenta millones de pesos) a título de daño moral.

III.- Que la cantidad mencionada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de dictación del fallo, y devengará intereses corrientes desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

IV.- Que no se condenará en costas a la demandada por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol C-17527-2020



Pronunciada por doña Daniela Royer Faúndez, Juez Titular.

En Santiago, a catorce de Marzo de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

